

Leg. Del  
Nov. Dic. 1983

## LA VIOLENCIA Y LA VERDAD

Una sensación de duda y de creciente escepticismo respecto de la versión oficial, flota entre los chilenos acerca de la violencia producida con motivo de las protestas de los últimos meses.

El Gobierno y los medios de comunicación que lo respaldan han puesto mucho empeño en atribuir esa violencia a extremistas opositores en conexión con elementos del lumpen. El Ministro del Interior expresó no tener dudas de que, "usando como pantalla a la Alianza Democrática, un comando extremista está promoviendo todos estos hechos". Se trataría de "una mano oculta" que usa armas y métodos "muy propios de los sectores que propician un enfrentamiento permanente de guerrilla".

Obviamente, quienes sostienen esa hipótesis concluyen que no debe haber protestas, porque éstas siempre serán aprovechadas para provocar excesos deplorables. Por consiguiente, los demócratas debiéramos abstenernos de protestar, aún por los medios más pacíficos, ya que al hacerlo incentivaríamos la violencia y serviríamos de "pantalla" a partidarios de la guerrilla. Pero a pesar de la publicidad gastada para imponer a la opinión pública esta versión sobre el "vandalismo", ella no logra convencer, porque prescinde u oculta muchos hechos importantes. Hasta "El Mercurio" ha dado cuenta de muchos excesos de la represión policial, de que casi todos los muertos y heridos lo han sido con balas disparadas con armas de las que usan las fuerzas de orden y de seguridad, de la aparición en las poblaciones de personas extrañas que actúan como provocadores y desaparecen en completa impunidad y de alarmas provocadas por Carabineros y otros funcionarios al alertar a algunos pobladores contra supuestos ataques de otros. Múltiples testimonios dignos de crédito corroboran estos hechos, que la propia Iglesia ha denunciado.

Ha pasado más de un mes y medio desde que la Alianza Democrática, en su primera reunión con el Ministro Jarpa, pidió el esclarecimiento de las muertes ocurridas con ocasión de la protesta del 11 de Agosto. Nada se sabe hasta ahora de las investigaciones prometidas entonces, y resulta a lo menos sospechoso que, en una insólita declaración, la Dirección de Investigaciones amenazara con detener arbitrariamente a quienes participan en la Comisión Investigadora propuesta por la Federación de Colegios Profesionales.

La inmensa mayoría de los chilenos quieren soluciones pacíficas para los graves problemas que aquejan al país y que los afectan en sus propias vidas. Cualquiera que sea su afiliación, repudian la violencia. Al mostrarse renuente a esclarecer sus orígenes, el régimen dá pábulo para pensar que en su propio seno hay interesados en utilizar el miedo y la repulsa que suscitan la violencia, para justificar la mantención indefinida del actual orden autoritario.

El país tiene derecho a saber la verdad sobre este delicado asunto, como sobre muchos otros. Se ha dicho, con razón, que la violencia es la secuela inseparable de la mentira. El respeto irrestricto a la verdad, a toda la verdad y nada más que la verdad, es la base necesaria e insustituible de la confianza pública en que reposa toda convivencia pacífica.

Al requerir al Gobierno la formación de una Comisión Independiente, del más alto nivel, que con amplias facultades y en breve plazo investigue objetivamente los hechos de violencia que han conmovido a los chilenos e informe al país de las conclusiones a que llegue, la Alianza Democrática ha planteado algo que pesa como un deber ético ineludible sobre la conciencia nacional. El Gobierno no puede rehuir ese deber.

Patricio Aylwin